
BALAGUER, 1986-87: UNA NUEVA LEGITIMIDAD POLITICA

Wilfredo Lozano*

INTRODUCCION

Después de su derrota electoral en 1978, tras ocho años de ausencia del poder, el Dr. Joaquín Balaguer regresa a la presidencia, derrotando en las elecciones de mayo de 1986 con su Partido Reformista, hoy también Social Cristiano, al Partido Revolucionario Dominicano, su principal rival en la arena política. Poco importa que el margen de votaciones que en esta ocasión le dio el triunfo al Dr. Balaguer fuese escaso, apenas unos cuarenta mil votos. Lo decisivo es que, pese a este estrecho margen, el Presidente Balaguer en apenas un año de gobierno haya logrado restablecer hoy día un consenso de masas en torno a su persona que resulta sin lugar a dudas asombroso, sobre todo si tomamos en consideración que el Dr. Balaguer es un hombre prácticamente ciego, y que no cuenta hoy con el enorme poder político que en su primer gobierno dispuso. Como sabemos, en el gobierno de los doce años (1966-78) ese poder le permitió al Dr. Balaguer una efectiva desmovilización política de sus opositores, radicales o revolucionarios, al precio, ciertamente, del autoritarismo político y la represión. Hoy la situación es distinta, pues ese pasado no le ha impedido al Balaguer de hoy mostrar una cara muy diferente a la mostrada en el pasado, haciendo así del respeto a los derechos humanos, del restablecimiento de la moralidad pública resquebrajada tras el último gobierno perredeísta de Salvador Jorge Blanco (1982-86), como de un clima de libertad de expresión y crítica indiscutible, las principales armas políticas del sostenimiento de su actual régimen.

(*) Doctor en Sociología (Colegio de México). Publicó *La dominación imperialista en la República Dominicana* (1976) y *El reformismo dependiente* (1985). Profesor en la UASD e INTEC.

La pregunta que se impone es, entonces, ¿sobre qué base política, cuáles circunstancias sociológicas explican el hecho de que Balaguer funda la base de su legitimidad política, precisamente en el espacio ideológico y político que en sus doce años de gobierno anteriores constituyeron su talón de Aquiles, debilidad sobre la cual se apoyó, tanto el movimiento revolucionario organizado, como el populismo perredeísta, para fundar su oposición al régimen de los doce años?

Nuestra proposición al respecto puede resumirse en el siguiente argumento: Balaguer en la difícil coyuntura de los años 1965-66 accede al poder del Estado en una situación de franco deterioro de la capacidad de mando político y social de las clases dominantes, y, en tal virtud, la misión fundamental del balaguerismo en esos años, por lo menos durante la primera mitad del régimen de los doce años (1966-72), fue la de restablecer las bases de la hegemonía burguesa resquebrajada. El precio que la burguesía pagaba por ello era la delegación de su representación política a la fracción balaguerista, en un esquema de dominación al que, en otra parte, hemos definido como bonapartista. Este esquema condenaba a la burguesía en su conjunto a su sometimiento político frente a la fracción balaguerista, obteniendo así apoyo estatal para su desarrollo como clase económica. Balaguer restableció así en los años 1966-78 las bases de la hegemonía burguesa en el Estado, pero al precio de la 'desmovilización burguesa como clase política.

Hoy día la situación es distinta, pues nadie duda del dominio hegemónico de la burguesía en el Estado, como tampoco pone en entredicho la fuerza política de los diversos grupos de intereses que existen en la sociedad civil a nivel empresarial, por sobre el cuadro completo de partidos representantes (¿real o ficticiamente?) de esos mismos intereses. En tales circunstancias ¿Qué representaría, pues, Balaguer?

Nuestra tesis es que en estas condiciones Balaguer accede al poder del Estado en una coyuntura de crisis económica que ha afectado el espacio de legitimación necesario para poder administrar la crisis misma frente a las masas, sobre todo a consecuencia del fracaso populista en el poder. De esta manera si en los años 70 la lógica política del reformismo balaguerista se cimentaba en la economía, sobre todo en el momento de mayor éxito de su modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, tras el boom de buenos precios del azúcar, hoy día la gravedad de la crisis social y económica como la ausencia de proyectos prospectivos burgueses al respecto, no puede encontrar otro espacio de respuesta que no sea el de la política. Vale decir, hoy día cualquier posibilidad de respuesta burguesa a la crisis social y económica

tiene que recorrer previamente el camino del rescate de la legitimidad burguesa quebrada tras el malogro de los gobiernos perredeístas, sobre todo el de Jorge Blanco. Ello, naturalmente, no asegura que tal respuesta tenga éxito en el plano económico, pero es indudable que la misma, cualquiera que ésta sea, exige de ese momento político legitimador.

De esta manera, si en la coyuntura de los años 1966-78 la tensión estatal inevitable entre legitimación y acumulación, entre política y economía, fue resuelta por la vía de la acumulación, del momento económico, con las consecuencias políticas de todos conocidas: desmovilización política, represión, etc., hoy día esa tensión, ante la gravedad de la crisis de legitimación del propio Estado, no puede resolverse sino en el campo de lo político. Lo singular de la nueva situación es que ello no asegura que los problemas de acumulación tengan perspectivas de solución a un plazo mediano, con lo que las bases de la legitimación pueden de nuevo y a su vez resquebrajarse. Es de esta manera que la crisis de legitimidad del Estado se convierte en una cuestión estratégica. Esto es lo que maximiza el valor e importancia de la actual política de moralización, otorgándole al campo de lo moral un rol decisivo para la estabilidad del Estado.

LA CRISIS DE HEGEMONIA DEL ESTADO POPULISTA

Un análisis de las características del régimen reformista en la hora actual, como del equilibrio de fuerzas sociales y políticas en el Estado, implica una discusión retrospectiva de los gobiernos perredeístas, por somera que ésta sea.

El primer punto que al respecto debemos considerar tiene que ver con el equilibrio de fuerzas en el Estado bajo los gobiernos populistas del PRD, equilibrio que naturalmente condicionaba el campo de maniobra de dichos gobiernos.

El PRD accede al gobierno en 1978 no sólo sostenido por un amplio concierto de masas, predominantemente urbanas, sino también presionado seriamente por las mismas, en materia de reivindicaciones económicas y sociales, las principales de las cuales eran las demandas de empleo y las exigencias de aumento salarial. El espacio de las masas para la presión frente al PRD se hacía mucho más fuerte en la medida en que los estratos dirigenciales intermedios del PRD tenían un gran poder negociador frente a la alta dirigencia, en tanto aquellos eran los que a nivel barrial, provincial, municipal, tenían el contacto efectivo con la base de masas del aparato político, con el electorado militante perredeísta propiamente tal. Es indudable que la capacidad de intermediación política de estos estratos dirigenciales intermedios les otorgaba un

gran poder negociador frente a la alta dirigencia, y, por este medio, frente al propio gobierno perredeísta. Sin embargo, esto, a su vez, implicaba una debilidad estratégica del aparato político como conjunto, pues le abría a amplios sectores de masas un espacio efectivo de presión, el cual resultó un arma formidable para que los grupos de intereses, en el partido sobre todo su alta dirigencia, lograra sostener una estrategia de movilidad social ascendente, ya como partido de gobierno.

Es necesario precisar, además, el vínculo precario entre el empresariado y los gobiernos perredeístas. Ya desde 1978 esta relación fue muy tensa. Relación en la que el acuerdo burgués-populista colocaba a los empresarios que sostenían contradicciones -reales o aparentes- con el reformismo, en la difícil situación de tener que apoyar reivindicaciones sociales de amplios sectores populares, sobre todo en materia salarial y de empleo, precisamente como requisitos mismos del desplazamiento del grupo o fracción balaguerista del poder.

Resultado de la acción de estas fuerzas sociales y políticas, el bloque en el poder rearticuló el equilibrio político estatal, abriéndose así un espacio de contradicciones "no previstas". En primer lugar, como partido de masas, ya en el gobierno el PRD se convirtió en un formidable vehículo de movilidad social para los estratos dirigenciales medios y altos, lo que potenció el manejo demagógico de la base de masas por parte de la dirigencia media y la ruptura con la misma por parte de la élite dirigente. De todos modos, el poder negociador del partido frente a los grupos empresariales se sostenía, precisamente, en el concierto de masas que el partido podía movilizar. Resultado de ello en un primer momento bajo el gobierno de Guzmán (1978-82) se modificó radicalmente la política económica del Estado, sobre todo en materia de empleo. Ello tuvo diversas consecuencias socioeconómicas. En primer lugar se amplió enormemente el aparato burocrático estatal, con más de 40 mil nuevos empleos en poco más de un año de gobierno perredeísta, lo cual modificó radicalmente la política de gastos públicos, potenciando el gasto corriente por sobre el gasto de inversión. Dadas las dificultades económicas por las que atravesaba el país, ello activó un sistemático incremento del déficit fiscal, cuya respuesta alternativa fue el incremento de la deuda pública, tanto interna como externa. Todo ello se verificaba en un contexto en que a consecuencia de la crisis mundial, los precios del petróleo se elevaban sistemáticamente, absorbiendo alrededor del 40 por ciento del valor de las importaciones, al tiempo que la economía azucarera entraba de modo definitivo en una nueva onda recesiva.

Para los fines de nuestro análisis debemos destacar dos

consecuencias importantes de esta situación: la primera es el distanciamiento que esto comenzó a plantear entre el empresariado y el gobierno. La segunda es la articulación de una política prebendaria y clientelista articulada por el gobierno a propósito del empleo. Política que intentaba sustraerle al partido su tradicional capacidad de captación de masas, desplazándola a la fracción perredeísta en el poder liderada por el entonces Presidente Guzmán. Ello, unido a las disputas internas entre la fracción perredeísta en el poder y los sectores dirigentes excluidos del mismo, pero controladores de parte del aparato estatal por la vía congresional, abrió un nuevo espacio de contradicciones en el seno del partido de gobierno, como en el propio bloque de fuerzas populistas en el Estado. A nivel formal, dichas contradicciones se expresaron en dos espacios políticos definidos: 1) entre partido y gobierno y 2) entre gobierno y congreso.

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO POPULISTA Y SUS LIMITES

La estrategia de política económica que el populismo en el poder bajo el gobierno de Guzmán articuló se ha definido como la Política de la Demanda Inducida (PDI), de claro ascendiente keynesiano. En una situación recesiva, siempre y cuando exista un potencial productivo interno adecuado, tal estrategia puede apoyar un proceso de recuperación económica, como el New Deal lo revela y la recuperación económica europea lo confirma. Pero en un contexto de subdesarrollo, en economías abiertas como la dominicana, esta estrategia encuentra serias limitaciones, sobre todo debido a los límites expansivos del aparato agroexportador, base del dinamismo global de la economía. De no modernizarse este aparato, y del mercado mundial encontrarse en una situación recesiva, muy difícilmente una estrategia de este tipo a largo plazo estimularía la inversión interna, como paso previo a la recuperación de la economía en su conjunto.

En esta ocasión sólo nos interesa destacar algunas de las consecuencias políticas de esta política económica.

Como hemos visto, la PDI estimuló enormemente el empleo público, potenciando el gasto corriente por sobre el gasto de inversión, lo cual potenció el déficit fiscal y la deuda pública. Ello abrió un espacio inédito al capital financiero, local y extranjero, para su expansión y dominio de la economía. Por lo pronto, la exorbitante deuda pública interna desplazó gran parte de la cartera de créditos de la banca local del sector privado al estatal, convirtiendo así al Estado prácticamente en el principal deudor de la banca local. A nivel internacional ello dio paso a un creciente dominio de la banca extranjera sobre las decisiones de política

económica del Estado. Esta tendencia cristalizaría sus dramáticas consecuencias en el subsecuente gobierno perredeísta: el presidido por Salvador Jorge Blanco.

La PDI se movió también en otra línea de acción. En esa ocasión se intentaba liberalizar de las tradicionales restricciones y controles de precios al sector agrario. Sin embargo, los principales favorecidos no fueron los pequeños agricultores minifundistas, sino más bien la gran burguesía agraria, y, en menor medida, el campesinado medio. El PRD, pese a esta limitación intentaba de esta manera establecer una base de apoyo agraria, dado el hecho de que era éste el sector de la sociedad donde tradicionalmente se había demostrado su debilidad, siendo el bastión político de su principal opositor: el reformismo balaguerista.

Sin embargo, ello trajo aparejado una serie de contradicciones, pues si la liberalización de precios que se planeaba fortalecía a determinados grupos agrarios, en un contexto de atraso rural y bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, ello potenciaba el estímulo a la inflación, sobre todo en el ámbito urbano, en lo referente a los bienes salarios de origen agrícola. Con ello la hegemonía tradicional del PRD sobre los trabajadores urbanos quedaba cuestionada.

Fue así que poco a poco la política populista encontró serias limitantes para su implementación y desarrollo. La inflación galopante, y el obligado freno a la política de empleo masivo de los primeros momentos del gobierno de Guzmán, unido a una ruptura de las relaciones entre el movimiento obrero organizado y el gobierno, poco a poco fue desgagándole al populismo en el poder su base de apoyo popular-urbana. En medio de esta crisis, el empresariado que otrora le prestara su apoyo a la fracción perredeísta liderada por Guzmán, tras el compromiso burgués-populista de las elecciones de 1978, desplazaba su apoyo a la fracción liderada por el entonces senador del Distrito Nacional Salvador Jorge Blanco. Sin saberlo, y a su despecho, la burguesía entraba en la lógica de reproducción política del populismo en crisis, compartiendo así con éste su tragicómico destino.

Ya instalado el nuevo gobierno populista, con Jorge Blanco a la cabeza, poco a poco el empresariado forzaba al sector jorgeblanquista a la ruptura del acuerdo populista sobre el que se cimentó su alianza en 1978. Es más, ya en el diseño de la campaña electoral de 1982 estaba planteada la ruptura estratégica: en dicha campaña un tipo de organización como la "Avanzada Electoral" expresaba claramente el nuevo compromiso. Dicha organización no era perredeísta, ni tampoco popular. En ella se concitaba el apoyo de sectores profesionales y de clase media al proyecto jorgeblan-

quista, pero sin necesidad de asumir compromisos directos con el PRD. De esta manera la fracción jorgeblanquista articulaba un discurso coherente: se intentaba hacer de la clase media urbana, la base de apoyo del nuevo compromiso de esta élite política con el empresariado. El resultado fue un mayor grado de libertad para los grupos empresariales en su enfrentamiento de la crisis y en sus relaciones con el Estado.

El nuevo compromiso cristalizó en la política de ajuste que implementó el gobierno de Jorge Blanco para enfrentar la crisis; estrategia que lo condujo a los acuerdos con el FMI y a la profundización de sus lazos y relaciones de dependencia respecto al capital financiero. Esta estrategia era el reverso de la política económica guzmanista; de la inducción de la demanda se pasaba a la recesión inducida de la economía.

Las consecuencias no se hicieron esperar. El FMI exigía liberalizar precios, eliminar subsidios, constreñir el gasto corriente y reducir el volumen de empleos públicos. Sin embargo, el gobierno jorgeblanquista estaba atrapado por su base de masas. Por ello, pese a que lo deseara, no se podía proceder a una política de desempleo masivo, como tampoco de liberalización completa de subsidios y precios. El resultado fue la constricción del salario, la inflación dirigida y la caída de la inversión.

En la esfera política, esto aceleró el proceso de pérdida de consenso del populismo respecto a los grupos populares urbanos. A esto se le añadió el hecho de que la recesión de la economía, y las restricciones y controles impuestos por los acuerdos con el FMI y el gran capital financiero hicieron entrar en crisis a los estratos intermedios de la burguesía industrial y comercial. Con ello no sólo los grupos industriales quedaban derrotados, sino subordinados a la lógica de la banca. Se rearticulaba así el equilibrio de fuerzas burguesas en el Estado, lo cual afectó el equilibrio de fuerzas en el seno del populismo quebrando definitivamente su ya precaria unidad.

Por lo pronto, la ya clásica disputa de los gobiernos populistas entre gobierno y congreso se agudizó a niveles extremos, como un reflejo de la federalización de los grupos de intereses en el seno del partido de gobierno. Esta crisis interna del PRD y su reflejo estatal le restó notable capacidad de maniobra a los dirigentes de las diversas fracciones frente a su base de masas, constriñéndose así el campo de mediaciones que frente a las masas representaba el dirigente medio. Ello tuvo un resultado inmediato: la entropía del clientelismo y la prebenda.

De este modo la acción política del partido gobernante frente a las masas se pulverizaba en la acción corporativa de los grupos

de intereses al interior del partido, con la consecuente pérdida del consenso legitimador ante las mismas.

Por otro lado la disputa al interior del PRD agudizó el proceso de corrupción de las élites dirigentes, sobre todo de las detentadoras del poder estatal. Esto, unido a la fragmentación del poder en el interior del partido, poco a poco abandonó a sus adversarios políticos el terreno donde precisamente tenía que ejercerse la hegemonía estatal en la sociedad civil. Esto se expresó en una sistemática incapacidad, tanto del partido como de su gobierno, para reestructurar el equilibrio político no sólo al interior de los diversos grupos de intereses en el seno del partido, sino en la sociedad civil misma. Esta situación llegó a un extremo tal que en 1984, tras la revuelta popular del mes de abril, el saldo fue trágico: el asesinato de más de cien jóvenes, cientos de heridos y millares de detenidos.

Se desataba así un proceso acelerado de pérdida de la legitimidad populista sobre las masas, sobre todo urbanas, cuyo reflejo en el ámbito electoral en las elecciones de 1986, no se hizo esperar. El voto popular urbano se fragmentó: de un lado el voto peledista (PLD) aumentó significativamente en los estratos obreros urbanos, convirtiendo a ese partido en el depositario del voto obrero que otrora fuera depositario el PRD. El voto conservador reformista se fortaleció en áreas que antes eran tradicionales bastiones del populismo perredeísta: las masas marginales urbanas. Es cierto que aun así el voto perredeísta se mantuvo mayoritario en las ciudades, pero ahora tenía que compartir con el PLD su ascendiente político sobre las masas urbanas, y con el PRSC, en menor medida, el dominio clientelista de las masas marginales urbanas.

¿EN QUE CONSISTE LA CRISIS DE LEGITIMIDAD?

En primer lugar, es necesario expresar que la crisis de legitimidad a la que la crisis del "Estado Populista", bajo los gobiernos del PRD, abocó el dominio burgués en el Estado, no puede en modo alguno caracterizarse como crisis hegemónica. Es una crisis que ciertamente tiene como condicionante la incapacidad del Estado, como de las clases dominantes consideradas en su conjunto, para articular una estrategia de política económica alternativa y coherente frente a la crisis económica, pero también expresa, por sobre todo, la incapacidad del sistema de partidos tradicionales -sobre todo los grandes partidos de masas- para articular estrategias exitosas de generación de consenso.

Es necesario aclarar que dicha crisis tiene como vector de rearticulación del capital bajo el dominio de su fracción financie-

ra, como la reterciarización de nuestra economía, provocadas por la dinámica misma del modelo económico de crecimiento hacia adentro de base industrial en sus consecuencias de largo plazo, como por la rearticulación económica de la crisis de los ochenta.

Es de este modo que dicha crisis de legitimación es sobre todo el resultado de la crisis del sistema de partidos tradicionales, como afirmamos, ante el agotamiento del campo de maniobra de las élites burocráticas y políticas frente a las masas, en medio de una crisis económica aguda, rearticuladora de esas relaciones de fuerza entre las diversas fracciones del capital. En ese contexto, el interés político estatal en manos de los grupos políticos populistas fue desplazado por el interés corporativo y burocrático de las élites, dando paso al prebendalismo, la clientela y a la corrupción generalizada. Más allá de los efectos dilapidadores en el Estado, ello expresaba una notable incapacidad de las élites políticas para articular un discurso estatal donde la voluntad general del Estado se expresara por encima y más allá del corporativismo burocrático. En consecuencia, socavaba la capacidad consensual del Estado como aparato. De este modo fue que el peculado burocrático en el Estado, no sólo actuó sobre su crisis fiscal, sino sobre la capacidad de legitimación misma de éste frente a las masas.

Esta situación se agudizaba en la medida en que en el ámbito de la sociedad civil no existían canales a través de los cuales las masas, como el propio Estado, pudieran redefinir sus relaciones en el contexto de la crisis económica, más allá de los tradicionales canales políticos controlados por los grupos de intereses burocráticos y el clientelismo en los grandes partidos de masas. De aquí que en 1978 el populismo perredeísta no sólo fuera derrotado y desplazado por el reformismo balaguerista, sino que su propio discurso ideológico se hiciera añicos.

BALAGUER HOY Y LAS NUEVAS MODALIDADES DE LA LEGITIMACION ESTATAL

Fue en ese contexto que Balaguer encontró el espacio para su recuperación política, presentándose ante el electorado como la opción política salvadora, lo cual en modo alguno le era un hecho extraño en su larga vida política. En esta ocasión no se trataba de rearticular la hegemonía sentando las bases del equilibrio de fuerzas en el Estado, asegurando la desmovilización política de las clases subalternas. Se trataba en esta ocasión de restablecer la legitimidad perdida del Estado, tras el fracaso político del populismo perredeísta.

En tal situación, el nuevo gobierno reformista, más allá del hecho (evidente por sí mismo) del propósito balaguerista de

recuperación de su imagen histórica como agente conservador de la modernización y como sujeto defensor de las libertades democráticas, asume características singulares.

En primer lugar, la crisis del sistema de partidos le facilita a Balaguer fortalecer una opción política carismática y providencialista donde la figura del líder aplasta a la organización, como forma o modalidad de diálogo del Estado con las masas. En el ámbito de la actividad estatal, es claro que esto resta capacidad de maniobra a la burocracia civil. Ello tiene dos modalidades esenciales: por un lado la centralización del mando restringe el campo de maniobra al peculado burocrático. Sin embargo, ello tiene un efecto rebote pues tiende a generar ciertos bloqueos a las iniciativas de gestión administrativa de los aparatos burocráticos gubernamentales, con lo que la eficiencia de la gestión se entorpece.

Ahora, el debilitamiento de la organización política en la hora actual ha potenciado sobre nuevas bases la acción corporativa de la sociedad civil, con el atenuante de la centralización del poder estatal en la figura del líder. Esta situación tiene efectos directos en la dinámica del control del conflicto social, como lo reveló la pasada huelga del pasado 28 de julio. Más interesante a este respecto es, quizás, el estudio de la escalada de huelgas y protestas populares que precedieron a la huelga general. Dichos paros y protestas nunca se propusieron objetivos propiamente políticos y el marco reivindicativo de los mismos afectaba espacios restringidos de la sociedad civil de manera muy localizada. Esto, unido a la incapacidad de mediación política del conflicto social por parte de los partidos hizo de la figura del presidente el interlocutor natural de los propios intereses populares en el Estado, no ya para el caso, de la camarila burocrática. En un solo acto el presidente identificaba al Estado con su persona, pero al hacerlo desarmaba las posibilidades del conflicto al trasladar su discurso del ámbito del enfrentamiento entre las clases, al de la defensa del ciudadano como sujeto individual. Fue el mismo presidente que declaró que las protestas eran justas, a despecho de los propios organizadores de los movimientos, como de los epígonos del reformismo. Con ello el presidente confesaba que los "culpables de las situaciones que generaban esos conflictos" debían buscarse en otro espacio social, no en el Estado, sino en la sociedad civil. Esto colocaba al presidente como el líder carismático que reconoce la justeza de una demanda, pero lo limpia de responsabilidad en el diálogo, convirtiéndolo en el fiel de la balanza política frente a la sociedad civil y sus grupos corporativos. De aquí que la mayoría de los movimientos de huelga o protestas terminaron en el momento en que el presidente de la República, o una de las

numerosas comisiones por él nombradas, "pasara a estudiar el asunto".

De esta manera la dinámica del equilibrio se subvertía. Si bajo el gobierno de los doce años, la modalidad bonapartista de Estado colocaba al presidente como el fiel de la balanza política entre los diversos grupos de interés de la sociedad civil, el espacio de ese equilibrio lo definía el territorio estatal, precisamente en el ámbito ejecutivo y militar. Los gobiernos perredeístas modificaron esa dinámica desplazando -tras la desmovilización política del ejército- la lógica del equilibrio político del terreno militar al civil, a propósito de la disputa ejecutivo-congreso. Pero en ambos casos el territorio de esta dinámica estaba definido en las angostas recámaras del poder estatal.

Hoy día la situación es distinta. La crisis del sistema de partidos, como la desmovilización política del ejército y la extrema corporativización de la sociedad civil, sobre todo de las clases medias y de los grupos empresariales, fuerzan a modificar la lógica del equilibrio político. En tal sentido, si bien en la figura del líder carismático, permanece como el fiel de la balanza política, la dinámica del equilibrio político tiende a desplazarse ahora en los grupos corporativos de la sociedad civil, dada la ausencia de mediaciones políticas efectivas a nivel de los partidos. Es este el punto que le permite a Balaguer montar una estrategia que modifica las relaciones entre representantes y representados, en el sentido del desplazamiento de la relación partido-masas, por la del líder-masas o líder-organismos corporativos. Es indudable que en la situación de crisis del sistema de partidos lo referido permite una coyuntural eficacia en la administración del conflicto social, pero el precio que se paga por ello es el socavamiento o puesta en jaque del sistema de instituciones políticas sobre las que descansa el Estado capitalista mismo.

Estos problemas se expresan con claridad en las nuevas modalidades del consenso político en el Estado, en que las actuales circunstancias se intenta generar. En tal sentido, veamos, para finalizar, un par de casos que ejemplifican con claridad lo afirmado.

El primero y más llamativo es el claro propósito balaguerista de recuperar su imagen hegemónica frente al campesinado. Pero aquí de nuevo la tensión entre legitimación y acumulación, entre política y economía, se expresa en su cruda desnudez. Balaguer acude al expediente de la reforma agraria como estrategia de hegemonía frente al campesinado, pero la crisis misma de la economía, como las limitaciones de su concepción del proceso de reforma, lo conducen a moverse en una ambivalente política que

va del silencio calculado o la reprimenda paternal, frente a las tomas de tierra, a un discurso ideológico prebendalista frente a los campesinos, en medio de un tortuoso y lento proceso de asentamientos, que en general no encuentra su recíproco en el impulso sostenido a un proceso modernizador de la agricultura en su conjunto. Es de esta manera que si bien el ejecutivo proclama la necesidad de la reforma agraria, ésta se hace lenta, al tiempo que la agricultura no recibe el apoyo económico consecuente con una estrategia modernizadora, y en los casos en que así lo ha sido, sus efectos benéficos no han favorecido a los campesinos, sino más bien a la burguesía agraria, nativa y extranjera. Para nuestros fines analíticos, ello trae aparejado serias limitantes políticas al ejercicio de la hegemonía burguesa sobre los campesinos, pues ésta tiende a apoyarse sólo o de modo casi exclusivo, en la lógica de la legitimación política, sin un correlato efectivo de modernización agraria en el ámbito social y económico.

La cuestión de la moralidad pública es otro caso paradigmático. Indudablemente que en el expediente de la moralización desempeña un papel determinante el propósito de Balaguer por recuperar su imagen histórica como hombre público. Desde esta perspectiva no tenemos dudas de que Balaguer se encuentra interesado en afirmar este proceso. Sin embargo, este propósito se desplaza en un contexto de fuerzas políticas que afectan la estabilidad y equilibrio políticos mismos del Estado. Desde esta última perspectiva, los procesos judiciales contra los personeros del anterior gobierno de Jorge Blanco envueltos en actividades de corrupción contra el Estado han sido manejados con muchas fallas técnicas desde el punto de vista jurídico, a consecuencia de su manejo estratégico en el plano político. Es claro que el expediente de la moralización genera efectos políticos positivos al régimen, como también sienta precedentes en igual tenor para las futuras administraciones que tenderán a frenar la corrupción y el peculado burocrático-estatales. Pero el manejo político de este expediente legitimador puede volverse contra el Estado, en la medida en que la propia justicia enteltesca los procesos, haga la vista gorda en muchos casos, o permita sencillamente que los inculpados en los actos de corrupción escapen fácilmente de ella.

Un último aspecto interesante es el papel desempeñado por la Iglesia en el actual proceso político. Este papel expresa mejor que ningún otro la necesidad de recuperación de la legitimidad burguesa por parte del Estado, ante su propia crisis moral y organizativa. En tal virtud la Iglesia, como aparato ideológico de Estado, ha pasado a desempeñar una función legitimadora decisiva. Ella opera como mediación determinante en el control del

conflicto social, como en la tarea de equilibrio de los grupos corporativos empresariales con el Estado.

Estos pocos ejemplos ponen al desnudo la dinámica contradictoria que hoy día se plantea entre legitimación y crisis económica en el ejercicio de la dominación. De este modo, si en el gobierno de los doce años Balaguer en medio de una crisis de hegemonía que puso en peligro las bases mismas del poder del Estado, intentó resolver esta tensión por la vía de la acumulación, en la actual situación de ausencia de modelos alternativos a nivel económico, con los cuales enfrentar de modo coherente la crisis, y atrapado por una profunda crisis de legitimación del Estado, heredada a consecuencia del fracaso populista en su gestión estatal, Balaguer intenta hoy restablecer las bases de la precaria unidad del Estado privilegiando el momento de la legitimación por sobre el momento de la economía. ¿Hasta qué punto, y durante qué tiempo podrá sostenerse esta estrategia? ¿cuáles son los niveles de concesión y la capacidad de compromisos de clases la sostengan? ¿Esta estrategia es capaz de contener la potencialidad del conflicto de clase que facilite el camino para la recuperación económica, vale decir, para el impulso posterior del momento de la acumulación? Estas y otras interrogantes se plantean hoy y su respuesta no encontrará otra ruta que la de una reflexión fundada en una praxis comprometida con ese destino: ya del lado de las fuerzas populares o de los elementos del orden. La reflexión propiamente teórica, como la lechuza de Minerva, siempre eleva su vuelo al atardecer.